

Los procesos de Harry Bridges

Donald Trump puede acaparar los titulares con sus propuestas de imponer pruebas ideológicas a los inmigrantes musulmanes, pero el miedo a las ideologías “extranjeras” y el uso de la política migratoria para controlar la heterodoxia política no son originales del magnate multimillonario.

Por un lado, tanto las administraciones de Obama como de Bush prohibieron la entrada a Estados Unidos de individuos debido a sus opiniones políticas.

Pero aún más atrás —cuando el miedo a la agitación laboral anticapitalista pesaba especialmente en la mente de las élites— se encuentra el caso ilustrativo de Harry Bridges, el líder sindical nacido en Australia. Aunque hoy en día es en gran medida olvidado fuera de los círculos laborales, Bridges fue el blanco de una vasta e implacable campaña en las décadas de 1930 y 1940 que buscaba su deportación del país.

Periódicos de derecha, asociaciones empresariales y la Legión Americana presionaron al gobierno federal para expulsarlo. Departamentos de policía locales y el FBI intentaron encontrar razones para deportarlo. Múltiples funcionarios de nivel ministerial supervisaron los esfuerzos de deportación en su contra y se reunieron directamente con el presidente Roosevelt sobre el asunto. El Congreso realizó audiencias, aprobó legislación e incluso consideró enjuiciar a la secretaria de Trabajo de Roosevelt, Frances Perkins, por lo que consideraban un retraso inapropiado en los procedimientos contra Bridges. La Corte Suprema finalmente escuchó dos casos relacionados con su deportación. No había ninguna rama del gobierno que no estuviera de alguna manera involucrada en los intentos de expulsar a Harry Bridges.

Por encima de todo, la odisea de la deportación de Bridges sirve como recordatorio de hasta dónde puede llegar el Estado para controlar la expresión política, especialmente de la variedad radical.

Bridges —quien inmigró a Estados Unidos desde Australia en 1920 y se unió brevemente a los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW)— era un firme defensor del sindicalismo de izquierda. Bridges argumentaba que no solo las bases deberían controlar el sindicato, sino que los sindicatos debían apoyar a sus compañeros cuando estaban en huelga y tomar posturas firmes por la igualdad racial y las libertades civiles.

Sin embargo, fue su participación en la Huelga de la Costa Oeste de 1934 lo que realmente desencadenó la caza de brujas sostenida en su contra. Durante ochenta y tres días, los trabajadores paralizaron los puertos de toda la costa. Tras el disparo de dos huelguistas por la policía, los trabajadores de San Francisco iniciaron una huelga general de cuatro días. El resultado final fue una victoria para los trabajadores, ya que los puertos de toda la Costa Oeste se sindicalizaron.

Dirigir una huelga exitosa y enfurecer a la clase capitalista no era, en sí mismo, un delito deportable. Pero gracias a una ley de inmigración aprobada durante el Miedo Rojo posterior a la Primera Guerra Mundial, estar “afiliado” a una organización que abogaba por el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos sí lo era.

El primer llamado a deportar a Bridges llegó apenas seis días después del inicio de la huelga. Oponentes de Bridges escribieron a la secretaria de Trabajo Frances Perkins (quien en ese momento tenía jurisdicción sobre inmigración), alegando que Bridges era miembro del Partido Comunista e instándola a deportarlo. Bridges sostuvo que, aunque había elogiado abiertamente su papel en el movimiento laboral, no pertenecía al Partido Comunista.

Perkins respondió a las solicitudes pidiendo pruebas contra Bridges, incluidos affidávits firmados que demostraran que Bridges era miembro del Partido Comunista. No recibió ninguna respuesta inmediata. No obstante, se reunió con Roosevelt para decidir si debía iniciar procedimientos de deportación contra Bridges, ordenó a los funcionarios de inmigración investigar su actividad política y solicitó información al FBI sobre él.

En 1938, después de cuatro años de rumores sobre que el Departamento de Trabajo se preparaba para expulsarlo del país, Bridges escribió a Perkins solicitándole que presentara cargos y pruebas en su contra para poder impugnarlos. Perkins ofreció cuatro cargos vagos, todos relacionados con su supuesta afiliación a una organización que promovía el derrocamiento del gobierno estadounidense. Incluso después de someterse a un arresto formal —y a pesar de las repetidas solicitudes de sus abogados para obtener cargos detallados— Bridges solo logró obtener un dato adicional: la organización en cuestión era el Partido Comunista. La defensa ni siquiera fue informada sobre los testigos que aparecerían en la audiencia.

Sin embargo, Bridges tuvo que esperar un año para enfrentar a sus acusadores. Perkins decidió retrasar su audiencia mientras la Corte Suprema decidía si un inmigrante polaco que había declarado libremente ante los funcionarios de inmigración que había sido miembro del Partido Comunista durante tres meses y medio podía ser deportado. “Para la mayoría de las personas”, señala el biógrafo de Bridges, Charles P. Larrowe, “la acción tomada por la señorita Perkins fue razonable”, ya que el fallo de la Corte Suprema tendría implicaciones inmediatas para el caso de Bridges.

La razonabilidad, sin embargo, no era una característica de los más feroces opositores políticos de Bridges. Miembros del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, entonces un bastión de la reacción que buscaba aplastar el liberalismo del New Deal tanto como el radicalismo genuino, exigieron el juicio político contra Perkins. En un momento, el presidente del Partido Demócrata, James A. Farley, incluso insistió en que Bridges fuera deportado sin importar la evidencia —decía que no hacerlo perjudicaba al partido.

En 1939, Perkins reanudó los procedimientos de deportación; la Corte Suprema había decidido que un inmigrante podía ser expulsado del país si era miembro del Partido

Comunista en el momento en que se emitía la orden, pero no por una membresía que hubiera terminado. Durante dos meses y medio, Bridges permaneció en la cocina de un edificio federal mientras el decano de la Facultad de Derecho de Harvard presidía su audiencia de deportación.

A pesar de años de investigación, el gobierno no logró presentar un caso sólido contra el líder sindical. Uno de los principales testigos del Estado, que afirmaba haber infiltrado grupos comunistas, admitió no solo haber perjurado mientras testificaba en el juicio penal de un organizador comunista, sino también haber mentido al día siguiente cuando discutía su perjurio pasado.

En otro momento durante la audiencia, la defensa y la fiscalía presentaron expertos enfrentados sobre teoría marxista para debatir si el Partido Comunista promovía el derrocamiento del gobierno. El significado de “afiliación” también fue un punto de contención.

Al final, el juez dictaminó que el gobierno no había probado que Bridges estuviera afiliado al Partido Comunista y, por lo tanto, no era deportable bajo la ley estadounidense.

Los opositores políticos de Bridges habían pasado los últimos cinco años intentando verlo exiliado. Habían denigrado su nombre en los periódicos, presionado al gobierno federal, presentado cargos en su contra en los tribunales. Y aun así, él seguía en suelo estadounidense.

Así que redoblaron sus esfuerzos. La Cámara de Representantes aprobó abrumadoramente un proyecto de ley instruyendo al fiscal general —quien ahora tenía el poder de deportar inmigrantes— a expulsar a Harry Bridges. Ese proyecto, considerado inútil, murió en el Senado.

Pero pronto el Congreso tomó un curso de acción más serio. En 1940, aprobó la Ley Smith. Posteriormente usada para procesar penalmente a la dirigencia del Partido de los Trabajadores Socialistas y del Partido Comunista, la ley también establecía como delito deportable haber estado afiliado en algún momento a una organización que promoviera el derrocamiento del gobierno. Aunque la aprobación de la Ley Smith no puede atribuirse únicamente a un ánimo irracional contra un líder sindical, los defensores del proyecto citaron a Bridges para justificar su necesidad.

Y efectivamente, cuando la Ley Smith entró en vigor, el fiscal general Robert Jackson pidió al director del FBI, J. Edgar Hoover, investigar si Bridges era deportable bajo la nueva ley. Hoover no perdió tiempo y viajó personalmente a San Francisco para supervisar la investigación. También se aseguró de que los medios conocieran sus acciones, diciendo a los reporteros que era la primera vez que Estados Unidos emprendía tal investigación desde 1919, cuando Hoover había liderado una pesquisa sobre Emma Goldman que resultó en su deportación.

Hoover esperaba un resultado similar esta vez. Concluyó en su informe a Jackson que había evidencia suficiente para expulsar a Bridges bajo la Ley Smith y filtró su investigación confidencial a la prensa (solo para asegurarse de que el público supiera que el hombre que había expulsado a Goldman lo había hecho de nuevo).

Así que, en 1941, el gobierno estadounidense llevó nuevamente a Bridges ante la corte —esta vez presentando su caso de deportación bajo la Ley Smith. El gobierno presentó cinco testigos, ninguno de los cuales había testificado en el juicio anterior. De los cinco, el juez consideró tres poco fiables. Pero luego recomendó que el gobierno expulsara a Bridges de Estados Unidos, basándose en el testimonio de los dos restantes.

Siguió una serie de afirmaciones y revocaciones de la decisión inicial: la Junta de Apelaciones de Inmigración revocó la deportación de Bridges por unanimidad. El fiscal general Francis Biddle revocó la decisión de la Junta y ordenó la expulsión de Bridges (la primera vez que un fiscal general revocaba tal decisión). La Corte Suprema tuvo la última palabra, fallando a favor de Bridges en 1945.

El gobierno había vuelto a fracasar en deportar al líder sindical radical.

En 1945, Bridges solicitó la ciudadanía estadounidense. Al preguntarle nuevamente sobre su membresía en el Partido Comunista, Bridges dio la misma respuesta que había dado durante los dos procedimientos de deportación anteriores. Por su persistencia, lo acusaron de perjurio.

Sin embargo, la Corte Suprema falló a favor de Bridges por última vez. El 15 de junio de 1953, con dos jueces absteniéndose por conflictos de interés, el máximo tribunal del país determinó que el gobierno no había probado que Bridges hubiera perjurado y anuló tanto su condena como la orden que le retiraba la ciudadanía.

Bridges viviría los siguientes treinta y siete años de su vida como había vivido los treinta y tres anteriores —en Estados Unidos. Murió en San Francisco en 1990.

El caso de deportación de Bridges nunca se trató solo de Harry Bridges. Antes que nada, se trataba de dismantelar un sindicato exitoso decapitando su liderazgo. Tras la exitosa huelga de 1934, el ILWU creció hasta convertirse en uno de los sindicatos más poderosos y militantes del país. Para los ideólogos antirradicales, esto solo podía ser obra de fuerzas externas.

Desde el inicio del movimiento laboral, los inmigrantes habían sido culpados de traer radicalismo “extranjero” a Estados Unidos e inyectar discordia en relaciones capital-trabajo que de otro modo serían armoniosas. La organización laboral se veía como equivalente a deslealtad, y se sospechaba que los inmigrantes trabajaban para rehacer a Estados Unidos a imagen de sus ideas “antiestadounidenses”. Todo lo que se necesitaba para “hacer a Estados Unidos grande de nuevo” y revertir las victorias de la clase trabajadora era expulsarlos del país.

El caso Bridges también representaba una política antiinmigratoria más amplia. Cuando se le preguntó sobre uno de los muchos esfuerzos por deportar al líder del ILWU, el senador Robert R. Reynolds (D-NC) dijo a los medios: “No se le debería permitir a Bridges salir del país solo. Hay miles de otros que deberían ser deportados o enviados a campos de concentración hasta que podamos deshacernos de ellos”.

Campos, deportaciones masivas: estas son las herramientas de quienes quieren “hacer a Estados Unidos grande de nuevo”. Un componente xenófobo está indudablemente en la raíz de esto. Pero no se equivoque: en tiempos de Bridges y en los nuestros, la visión última de los reaccionarios de controlar —y expulsar— la herejía política del cuerpo político se extiende mucho más allá de los nacidos en el extranjero.

The Trial(s) of Harry Bridges

BY [CHIP GIBBONS](#)

In the 1930s and '40s, conservative forces waged a relentless campaign to deport militant labor leader Harry Bridges.



Harry Bridges at a negotiating session during the 1934 waterfront strike. Bancroft Library

Donald Trump may be grabbing headlines over his [proposals](#) to impose ideological litmus tests on Muslim immigrants, but the fear of “foreign” ideologies and the use of immigration policy to police political heterodoxy are not original to the billionaire mogul.

For one, the Obama and Bush administrations [both barred](#) individuals from entering the United States because of their political views.

But even farther back — when the fear of anticapitalist labor agitation weighed especially heavily on the minds of elites — lays the illustrative case of [Harry Bridges](#), the Australian-born labor leader. Though largely forgotten today outside of labor circles, Bridges was on the receiving end of a vast, unrelenting campaign in the 1930s and 1940s that sought to have him deported from the country.

[Right-wing newspapers](#), business associations, and the American Legion pressured the federal government to expel him. Local police departments and the Federal Bureau of Investigation tried to dig up reasons to deport him. Multiple cabinet level officials oversaw deportation efforts against him, and met with President Roosevelt directly about the matter. Congress held hearings, passed legislation, and even considered impeaching Roosevelt’s secretary of labor, Frances Perkins, for what they deemed an inappropriate delay in the proceedings against Bridges. The Supreme Court ultimately heard two cases concerning Bridges’ removal. There was not a branch of government that wasn’t somehow involved in the attempts to expel Harry Bridges.

Above all, the Bridges deportation odyssey serves as a reminder of the lengths the state will go to police political expression, especially of the radical variety.

Bridges — who immigrated to the United States from Australia in 1920 and briefly joined the Industrial Workers of the World — was a staunch proponent of [left-wing unionism](#). Not only should the rank and file [control the union](#), Bridges argued, but unions should support their fellow unionists when they were on strike, and take strong stands for racial equality and civil liberties.

It was Bridges’ involvement in the [1934 West Coast Waterfront Strike](#), however, that really triggered the sustained witch hunt against him. For eighty-three days, workers shut down ports across the coast. After police shot two strikers, workers in San Francisco launched a four-day general strike. The end result was a victory for workers, as ports up and down the West Coast unionized.

Leading a successful strike and angering the capitalist class was not, on its face, a deportable offense. But thanks to an immigration law passed during the post–World War I [Red Scare](#), being “affiliated” with an organization that advocated the overthrow of the United States government was.

The first call to deport Bridges came [just six days into the strike](#). Opponents of Bridges wrote to Secretary of Labor Frances Perkins (who at the time had jurisdiction over immigration), alleging that Bridges was a member of the Communist Party and urging Perkins to deport him. Bridges maintained that though he had openly praised their role in the labor movement, he didn't belong to the Communist Party.

Perkins responded to the requests by asking for evidence against Bridges, including signed affidavits that Bridges was in fact a member of the Communist Party. She had no immediate takers. Nonetheless, she conferred with Roosevelt about whether she should initiate deportation proceedings against Bridges, directed immigration officials to investigate Bridges' political activity, and asked the FBI for information on him.

In 1938, after four years of swirling rumors that the Department of Labor was preparing to remove him from the country, Bridges [wrote](#) to Perkins asking her to produce charges and evidence against him so he could contest them. Perkins offered up four vague charges, all related to his supposed affiliation with an organization that advocated the overthrow of the US government. Even after submitting to a formal arrest — and in spite of his lawyers' repeated requests for detailed charges against him — Bridges only managed to secure one additional tidbit: the organization in question was the Communist Party. The defense wasn't even apprised of the witnesses that would appear at the hearing.

Bridges would have to wait a year to face his accusers, however. Perkins opted to delay his hearing as the Supreme Court decided whether a Polish immigrant who had freely volunteered to immigration officials that he had previously been a Communist Party member for three and half months could be deported. "To most people," Bridges biographer Charles P. Larrowe [notes](#), "the action Miss Perkins took was reasonable," as the Supreme Court's ruling would have immediate implications for the Bridges case.

Reasonableness, however, was not a trait of Bridges' fiercest political opponents. Members of the House Un-American Activities Committee, then a bastion of reaction that sought to [smash New Deal liberalism](#) as much as genuine radicalism, demanded [Perkins' impeachment](#). At one point the chairman of the Democratic Party, James A. Farley, even insisted that Bridges be deported regardless of the evidence — not doing so, he said, was hurting the party.

In 1939, Perkins renewed the deportation proceedings; the Supreme Court had decided that an immigrant could be expelled from the country if they were a member of the Communist Party at the time a warrant was issued, but not for a membership that had since been terminated. For two and half months, Bridges sat in the kitchen of a US federal building as the dean of Harvard Law School presided over his deportation hearing.

Yet in spite of years of investigation, the government failed to make much of a case against the labor leader. One of the state's main witnesses, who claimed to have infiltrated Communist groups, admitted to not only having perjured himself while testifying in the criminal trial of a Communist organizer, but having lied on the stand the previous day when discussing his past perjury.

At another point during the hearing, the defense and prosecution called dueling experts on Marxist theory to discuss whether the Communist Party promoted the toppling of the government. The meaning of "affiliation" was also a point of contention.

In the end, the judge held that the government had failed to prove that Bridges was affiliated with the Communist Party, and therefore was not deportable under US law.

Bridges' political opponents had spent the last five years trying to see him exiled. They'd denounced his name in the papers, pressured the federal government, brought charges against him in the courts. And still he stood on US soil.

So they redoubled their efforts. The House of Representatives overwhelmingly passed a bill instructing the attorney general — who now had the power to deport immigrants — to expel Harry Bridges. That bill, seen as futile, died in the Senate.

But Congress soon took a more serious course of action. In 1940, it passed the [Smith Act](#). Later used to criminally prosecute the leadership of the Socialist Workers Party and the Communist Party, the law also made it a deportable offense to have *at anytime* been affiliated with an organization that advocated the overthrow of the government. While the Smith Act's passage cannot be attributed solely to an irrational animus against one labor leader, proponents of the bill did cite Bridges in justifying its necessity.

And sure enough, when the Smith Act took effect, Attorney General Robert Jackson [asked](#) FBI head J. Edgar Hoover to investigate whether Bridges was deportable

under the new law. Hoover wasted no time, personally traveling to San Francisco to oversee the probe. He also made sure the media was well aware of his antics, telling reporters that this was the first time the US had undertaken such an inquiry since 1919, when Hoover had led an investigation into Emma Goldman that [resulted in her deportation](#).

Hoover hoped for a similar outcome this time around. He concluded in his report to Jackson that there was sufficient evidence to expel Bridges under the Smith Act and leaked his confidential investigation to the press (just to make sure the public knew that the man who brought down Goldman had done it again).

So in 1941, the US government once again hauled Bridges into court — this time pressing its deportation case under the Smith Act. The government presented five witnesses, none of which had testified at the previous trial. Of the five witnesses, the presiding judge deemed three of them unreliable. But he then recommended that the government expel Bridges from the US, based on the testimony of the remaining two.

A series of affirmations and reversals of the initial decision followed: the Board Of Immigration Appeals overturned the Bridges deportation in a unanimous ruling. Attorney General Francis Biddle reversed the Board of Immigration Appeals decision and ordered Bridges kicked out of the country (the first time an attorney general had overturned such a decision). The Supreme Court had the last word, ruling in Bridges' favor in 1945.

The government had once again failed to deport the radical labor leader.

In 1945, Bridges applied for US citizenship. Asked yet again about his membership in the Communist Party, Bridges gave the same answer he had given during the two previous deportation proceedings. For his persistence, they charged him with perjury.

The Supreme Court, however, sided with Bridges a final time. On June 15, 1953, with two justices abstaining due to conflicts of interest, the nation's highest court [found](#) that the government hadn't proven Bridges had perjured himself, and overturned both his conviction and an order stripping him of his citizenship.

Bridges would live the next thirty-seven years of his life as he had the previous thirty-three — in the United States. He died in San Francisco in 1990.

The Bridges deportation case was never just about Harry Bridges. First and foremost, it was about smashing a successful labor union by decapitating its leadership. Following the successful 1934 strike, the [ILWU](#) grew into one of the country's most powerful, most militant trade unions. For anti-radical ideologues, this could only be the work of outside forces.

Since the inception of the labor movement, immigrants had been blamed for bringing “foreign” radicalism to the US and injecting discord into otherwise harmonious capital-labor relationships. Labor organizing was viewed as tantamount to disloyalty, and immigrants were suspected of working to remake the US in the image of their “un-American” ideas. All that was needed to make America great again, and roll back working-class victories, was to remove them from the country.

The Bridges case was also a stand-in for a larger anti-immigration politics. When asked about one of the many efforts to deport the ILWU leader, Senator Robert R. Reynolds (D-NC) told the media, “Bridges should not be permitted to make the trip out of the country alone. There are thousands of others who ought to be deported or put into concentration camps until we can get rid of them.”

Camps, mass deportations — these are the tools of those who want to “make America great again.” A xenophobic streak is unquestionably at the root of this. But make no mistake: in Bridges' time and in our own, reactionaries' ultimate vision of policing — and expelling — political heresy from the body politic extends far beyond the foreign-born.